

# Aprendiendo a “vivir con lo nuestro”: “déficit cero” y crisis industrial

*Martín Schorr\**

En el marco de la estrategia de “déficit cero”, el gobierno de la Alianza decidió implementar un nuevo ajuste fiscal bajo el argumento de que, al decir del presidente De la Rúa, “no existe alternativa”. Un breve análisis de lo acontecido durante los años noventa con la industria local permite concluir que, lejos de garantizar que la economía argentina salga de una recesión que ya lleva tres años, la aplicación de medidas inspiradas en la ortodoxia fiscalista inducirá una profundización del actual cuadro de estancamiento económico, desarticulación y desintegración productiva, crisis ocupacional, y concentración de la producción y del ingreso.

---

\* Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Entre 1993 y 2000, el PIB global (valuado a precios constantes) se incrementó un 17%, mientras que el manufacturero creció apenas un 3%. Este peor desempeño del sector fabril con respecto a las restantes actividades económicas indujo una importante caída –del 12%– en su peso relativo en el producto bruto del país (descendió del 18,2% en 1993 al 16,0% en 2000); profundizando la tendencia a la desindustrialización que se viene registrando en el país desde mediados de los años setenta.

Si en lugar de analizar el incremento absoluto del nivel de actividad fabril se lo hace en términos relativos al comportamiento de la población se accede a conclusiones diferentes, ya que la leve expansión se convierte en una profunda contracción: en 2000, el PIB industrial por habitante fue casi un 7% inferior al registrado en 1993. De considerar que recién en este último año se habían alcanzado valores del producto bruto manufacturero semejantes a los correspondientes a 1974, puede concluirse que durante la década pasada se registró un proceso de deterioro sectorial que situó a la actividad en niveles más bajos que los vigentes hace más de un cuarto de siglo.

Esta aguda crisis industrial (para nada generalizada, dados sus impactos diferenciales sobre los distintos tipos de firmas y ramas que conforman el espectro fabril local)

tuvo un impacto de consideración sobre la ocupación en la actividad: entre 1993 y 2000, la cantidad de obreros del sector disminuyó un 25%, y lo hizo de manera prácticamente ininterrumpida. Esto tuvo efectos directos sobre los trabajadores del sector que quedaron en actividad (deterioro en sus condiciones de trabajo, caída de sus salarios, pérdida de su participación en el ingreso sectorial, etc.), al tiempo que constituye uno de los principales factores explicativos del notable aumento de la desocupación y de la creciente precarización laboral que se verificaron en el transcurso de los años noventa y persisten en el inicio del nuevo siglo.

Lo anterior indica que, como resultado de una década de ajuste ortodoxo, la industria argentina no sólo presenta prácticamente el mismo –o inferior– tamaño que hace 25 años, sino que también se ha acentuado en forma notable la pérdida de uno de los atributos centrales que la caracterizaron durante la vigencia de la sustitución de importaciones: su carácter dinamizador sobre el resto de las actividades económicas, tanto en términos productivos como en lo que respecta a la creación de puestos de trabajo.

La consolidación de las tendencias mencionadas remite, en primer lugar, a la conjunción de diversos factores:

- las principales características estructurales de las ramas de

mayor dinamismo y significación agregada del entramado fabril local y, estrechamente ligado a ello, el patrón de inserción en el sector de las firmas líderes (se trata de actividades que, en la generalidad de los casos, presentan un reducido aporte a la generación de valor agregado, encadenamientos productivos y puestos de trabajo: la agroindustria, la producción de petróleo y derivados, la elaboración de ciertos insumos intermedios de uso difundido y, en especial durante la primera parte de la década, la fabricación de vehículos automotores -cuya expansión se logró sobre la base de un régimen de protección especial que impulsó la importación de autopartes y trajo aparejada una profunda desarticulación de este complejo económico- );

- el sentido asimétrico adoptado por el proceso de apertura comercial instrumentado durante el decenio pasado (muy sesgado a las importaciones y a los espacios productivos con predominancia de Pymes), que indujo una caída considerable en el coeficiente de valor agregado del sector (o, en otras palabras, una significativa desintegración de la producción local);
- la conformación, en el nivel macroeconómico, de una estructura de precios y rentabilidades relativas que perjudicó a un número importante de ra-

mas fabriles (en especial, aquellas que se dedican a la manufactura de bienes transables con el exterior en las que las firmas de menor tamaño tenían una gravitación económica de significación); y

- la vigencia que mantiene la valorización financiera en la estrategia de acumulación y reproducción del capital de las principales empresas oligopólicas del sector.

Como sugiere la información presentada, los procesos señalados son explicados también -y de manera decisiva- por la forma en que la crisis que se inició a mediados de 1998 ha impactado sobre la economía y la industria argentinas. Desde ese año hasta 2000, el PIB global se redujo en algo más de un 4%, mientras que el correspondiente a la industria declinó aproximadamente un 10% (caída que se eleva al 13% en caso de considerar la variación del PIB fabril per cápita). Esta brusca contracción en el nivel de actividad manufacturera determinó una disminución muy significativa (de casi el 14%) en la ocupación obrera, y un aumento en la concentración de la producción y la centralización del capital (en las fases recesivas las grandes empresas tienden a aumentar su incidencia sectorial en detrimento de las pequeñas y medianas, como consecuencia de los diferentes procesos de reasignación del capital existente que suelen caracterizar

a estas etapas -fusiones, absorciones, quiebras, etc.-). A todo lo anterior hay que adicionar la caída en la inversión inducida por la crisis, lo cual debe ser resaltado dado el alto grado de obsolescencia tecnológica que prevalece en numerosas ramas y porque determina una disminución en la capacidad de crecimiento -presente y futura- del sector y del conjunto de la economía.

En ese contexto, los defensores locales del pensamiento neoconservador -es decir, los intelectuales orgánicos de "los mercados" o, en términos más específicos, de los distintos integrantes del bloque de poder económico (grupos económicos, grandes empresas extranjeras y acreedores externos)- señalan que esta situación se debe, básicamente, a la conjunción de dos factores: uno de índole exógena (crisis rusa, del sudeste asiático y de la economía brasileña, "devaluaciones competitivas" aplicadas en muchos países, etc.) y, fundamentalmente, otro de carácter endógeno (la falta de implementación de un "ajuste en serio" de la economía argentina).

Sin embargo, lo que no se señala es que precisamente el período más crítico por el que atravesó la industria manufacturera local en los últimos años (que se expresa, por ejemplo, en una caída del producto bruto sectorial que fue 2,5 veces más elevada que la que experimentó el PIB total, o en la

fuerte aceleración que se registró en el proceso de expulsión de trabajadores) es contemporáneo con la aplicación, durante el gobierno de Menem y bajo la gestión de la Alianza, de sucesivas políticas públicas de neto corte fiscalista tanto en el sector público nacional como en los distintos estados provinciales. Tales medidas apuntaron, en lo sustantivo, a generar un superávit fiscal que permitiera, al mismo tiempo, afrontar el pago de la deuda externa y mantener diversas modalidades de subsidio al capital concentrado interno (por caso, ciertos regímenes de promoción y/o protección a algunos sectores de actividad, o la reducción y/o la exención del pago de distintos tributos a los grandes agentes económicos, etc.).

Así, la conjunción de, por ejemplo, sucesivos ajustes del gasto público con la implementación de diversos "impuestazos" (que, en lugar de incrementar la presión tributaria sobre los sectores de mayores ingresos de la población, reforzó la presión sobre, principalmente, los de ingresos medios y bajos, es decir, aquellos que presentan una menor capacidad contributiva y en los que la carga impositiva tiene una mayor incidencia relativa sobre sus ingresos totales) y la rebaja del empleo y los salarios del sector público (con el consiguiente "efecto disciplinador" que ello conlleva sobre los trabajadores del ámbito privado), trajo aparejado un fuerte achicamiento de la demanda agregada, lo cual

impactó directamente sobre la actividad productiva.

Dicho proceso, al articularse con otras medidas también inspiradas en los postulados básicos del pensamiento ortodoxo (la profundización de la apertura asimétrica de la economía y la industria, la convalidación de una estructura de precios y rentabilidades relativas que discrimina a un número importante de sectores de la producción y favorece a un núcleo muy reducido de actividades y empresas mono u oligopólicas, la creciente priorización en las partidas presupuestarias del estado nacional de recursos destinados al pago de los servicios e intereses de la deuda externa y el cada vez más marcado desplazamiento de los destinados a áreas y/u organismos vinculados con la satisfacción de necesidades básicas de la población), indujo una muy aguda -y prolongada- recesión interna, particularmente intensa en el sector manufacturero. En ese marco, no es casual que como producto de dicha contracción de la demanda interna, la actividad fabril haya declinado tan pronunciadamente, ya que el grueso del producto sectorial se destina al mercado interno (las exportaciones de bienes industriales explican menos del 6% del PIB global).

En ese contexto, y atento a la experiencia de los últimos años, cabe preguntarse si la instrumentación del severo ajuste fiscal anunciado recientemente (asentado,

una vez más, sobre una disminución del gasto público -vía, en este caso, una reducción de los haberes jubilatorios y de los sueldos de los empleados estatales-, y una mayor presión impositiva sobre los sectores sociales de menor poder adquisitivo, en paralelo al mantenimiento de los ostensibles privilegios que gozan los distintos integrantes del poder económico y el compromiso estatal de "honrar" la deuda externa) determinará un aumento en la producción y el empleo (tal el argumento oficial) o si, por lo contrario, operará profundizando aún más todas las tendencias mencionadas en estas líneas (contracción de la demanda interna, desindustrialización, achicamiento y desintegración productiva, deterioro ocupacional, concentración económica, etc.). En ese caso, es de esperar que en un lapso más o menos breve se vuelva a llamar a los argentinos a realizar un nuevo "esfuerzo patriótico" (téngase presente, en este sentido, que el esquema del "déficit cero" establece que el gasto estatal se ajusta en función de la evolución de los ingresos públicos, que dependen, en gran medida, de la recaudación tributaria -variable, esta última, muy dependiente del nivel de actividad interna-).

Es indudable que la reversión -cuanto menos parcial- de las tendencias que se consolidaron tras una década de hegemonía neoconservadora, está estrechamente asociada con la aplicación de

políticas que, sobre la base de una mayor progresividad distributiva, apunten a incrementar la demanda interna. Esto último a partir de, por ejemplo:

- la instrumentación de un *shock* redistributivo que apunte el consumo interno (en especial, el de los sectores populares);
- la modificación radical en la estructura tributaria con la finalidad de incrementar la presión impositiva sobre los sectores de más altos ingresos y, en paralelo, reducir los gravámenes que pesan sobre los sectores más afectados por el ajuste ortodoxo;
- la implementación de un conjunto de medidas tendientes a reducir las fuertes asimetrías de acceso al crédito que enfrentan las distintas fracciones empresarias (la tasa de interés promedio a la que se endeuda una Pyme es muy superior a la que abona una gran empresa);
- la puesta en práctica de un conjunto de políticas que apunte a modificar la estructura de precios relativos existente (a partir de, por caso, una disminución de las tarifas de los servicios públicos) con el objeto de incentivar la inversión en el ámbito productivo (sobre todo, el manufacturero), abaratar los costos empresarios y, por esa vía, mejorar el tipo de cambio real;
- el incremento en el nivel de protección de la economía jun-

to con un reforzamiento de los -sumamente laxos- controles aduaneros vigentes;

- el establecimiento de algún tipo de regulación sobre los movimientos de capitales especulativos;
- la instrumentación de un conjunto de políticas tendientes a reindustrializar a las economías regionales y a configurar un nuevo perfil productivo en el que tengan creciente preponderancia actividades que se encuentran en las últimas etapas de la cadena de valor agregado, a la vez que sean dinámicas en lo que a creación de empleo y eslabonamientos productivos se refiere; y
- en un plano más general, la búsqueda por alterar la dinámica de las fracciones predominantes en el proceso de acumulación y reproducción del capital, de modo de encarar un proceso de reindustrialización del país sobre la base de una mayor equidad en materia de distribución del ingreso y una creciente inclusión social.

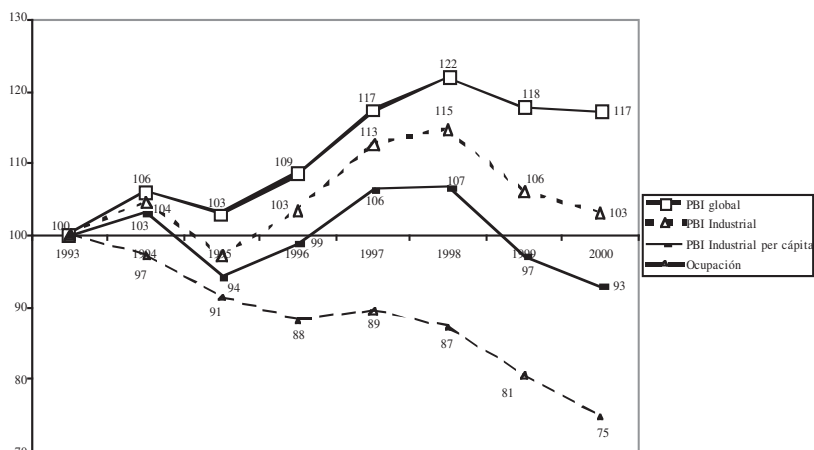
Evidentemente, la adopción de cualquiera de las medidas mencionadas, en tanto impondrían un cierto límite a la -hasta ahora, notable e imperturbable- expansión económica de las fracciones más concentradas del poder económico, traería aparejada, en paralelo a un abandono de los postulados centrales del neoliberalismo como principio rector excluyente de las

políticas públicas, una profunda modificación en el entramado de acuerdos político-sociales que sostiene al actual gobierno. Sin embargo, a juzgar por lo acontecido hasta el presente, dicha opción no parece encontrarse dentro los posibles “escenarios estratégicos” que maneja la Alianza, que ha reforzado de modo ostensible el pacto con el capital más oligopolizado que se configuró durante la última dictadura militar y se consolidó durante los gobiernos radical y peronista que la sucedieron. Indudablemente, el sostenimiento de este acuerdo entre la clase po-

lítica y el bloque de poder económico profundizará aún más un modelo de acumulación cuyos denominadores comunes son la desindustrialización ligada con la crisis de las Pymes, la centralización del capital, la concentración de la producción y el ingreso, la desocupación y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, la exclusión de un número creciente de individuos y, como consecuencia de todo lo anterior, la creciente fragmentación social.

23 de agosto de 2001

Argentina. Evolución del PIB global, el PIB industrial, el PIB industrial per cápita y la ocupación manufacturera, 1993-2000 (índice base 1993=100)



Fuente: Área de Economía y Tecnología de la FLACSO sobre la base de Ministerio de Economía e INDEC.